

No. 48956*

**Mexico
and
Bolivia**

Cooperation Treaty between the Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Bolivia on mutual legal assistance in criminal matters. La Paz, 3 May 2005

Entry into force: *11 December 2010 by notification, in accordance with article XIX*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Mexico, 1 September 2011*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Mexique
et
Bolivie**

Traité de coopération pour l'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République de Bolivie. La Paz, 3 mai 2005

Entrée en vigueur : *11 décembre 2010 par notification, conformément à l'article XIX*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Mexique, 1er septembre 2011*

** Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les textes reproduits ci-dessous, s'ils sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l'enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

**TRATADO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA
SOBRE ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA PENAL**

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Bolivia, en adelante denominados "las Partes";

ANIMADOS por el deseo de cooperar en el marco de sus relaciones de amistad y de prestarse asistencia jurídica para procurar la aplicación de la justicia en materia penal;

Han convenido lo siguiente:

**ARTICULO I
ALCANCE DEL TRATADO**

1. Las Partes se comprometen a prestarse asistencia jurídica, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y dentro de los límites de su respectiva legislación nacional, en la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con cualquier procedimiento penal relativo a hechos que en el momento en que fueron cometidos estuvieren dentro de la jurisdicción de la Parte Requirente.

2. El presente Tratado no faculta a las autoridades de una de las Partes a emprender, en el territorio de la Otra, el ejercicio y el desempeño de las funciones cuya competencia esté exclusivamente reservada a las autoridades de esa otra Parte por su legislación nacional.

3. Para el caso de la ejecución de medidas tales como el aseguramiento de objetos, decomiso, cateos o registros domiciliarios, la asistencia se prestará cuando el hecho que la origine sea punible según la legislación de ambas Partes. Cuando el

hecho que la origine no sea punible según la legislación de la Parte Requerida, ésta podrá autorizar la prestación de la asistencia dentro de los límites previstos por su legislación nacional.

4. Para los propósitos de este Artículo "materia penal" significará, para los Estados Unidos Mexicanos, investigaciones y procedimientos penales relativos a cualquier delito, ya sean del orden federal o local; y para la República de Bolivia, investigaciones y procedimientos penales relativos a cualquier delito tipificado por la legislación penal boliviana.

5. Se podrá prestar cualquier asistencia que sea consistente con los objetivos de este Tratado, siempre y cuando sea compatible con la legislación de la Parte Requerida.

ARTICULO II OBJETO DE LA ASISTENCIA

La asistencia jurídica comprenderá:

- a) práctica de diligencias, obtención y remisión de pruebas solicitadas;
- b) remisión de información y documentos;
- c) notificación de providencias, autos, sentencias y otros actos procesales;
- d) localización y traslado voluntario de personas en calidad de testigos o peritos;
- e) ejecución de peritajes, decomisos, aseguramientos, inmovilización de bienes, embargos, así como la identificación o detección del producto de los bienes e instrumentos de la comisión de un delito, inspecciones oculares, registros domiciliarios o cateos;

- f) intervención de comunicaciones privadas siempre que sea compatible con la legislación nacional de la Parte Requerida;
- g) facilitar el ingreso y permitir la libertad de desplazamiento en el territorio de la Parte Requerida a funcionarios de la Parte Requiriente, en calidad de observadores, previa autorización de las autoridades competentes de la Parte Requerida, con el fin de asistir a la práctica de las actuaciones descritas en el presente Tratado, siempre que la legislación nacional de la Parte Requerida lo permita;
- h) obtención de declaraciones; y
- i) cualquier otra forma de asistencia que convengan las Partes, que sea compatible con el objeto del presente Tratado y que no contravenga la legislación nacional de la Parte Requerida.

ARTICULO III DENEGACION O DIFERIMIENTO DE LA ASISTENCIA

1. La asistencia jurídica será denegada si:
 - a) existen motivos fundados para creer que la solicitud de asistencia se ha formulado con el fin de procesar a una persona por razón de su raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas, o que la situación de esa persona puede resultar perjudicada por cualquiera de esas razones;
 - b) la ejecución de la solicitud implica que la Parte Requerida exceda su competencia legal, o que de cualquier otra manera esté prohibida por sus disposiciones legales en vigor, en cuyo caso las autoridades coordinadoras se consultarán para procurar medios legales alternativos para proporcionar la asistencia;
 - c) la solicitud se refiere a un hecho tipificado como delito sólo en la legislación militar, a un delito político, o a cualquier delito conexo con los anteriores, a juicio de la Parte Requerida;

- d) la Parte Requerida estima que el cumplimiento de la solicitud atenta contra su orden público, soberanía o seguridad nacional;
- e) el requerimiento se refiere a un delito respecto del cual la persona ha sido exonerada definitivamente de responsabilidad penal o habiéndose condenado, se hubiere extinguido la sanción y las obligaciones derivadas del hecho punible; y
- f) la solicitud no satisface los requisitos exigidos por el presente Tratado.

2. La ejecución de la asistencia podrá ser aplazada si la prestación de la misma, perjudica una investigación o procedimiento judicial en el territorio de la Parte Requerida o la seguridad de cualquier persona relacionada con estos. En este caso se podrá disponer el aplazamiento o el conveniente condicionamiento de la ejecución, de lo que se informará a la Parte Requirente.

3. Antes de denegar el cumplimiento de cualquier solicitud, con arreglo a lo dispuesto en el presente Tratado, la autoridad coordinadora de la Parte Requerida, deberá determinar si existen condiciones cuya satisfacción haga posible que la asistencia se pueda proporcionar. Si la Parte Requirente acepta la asistencia sujeta a dichas condiciones, deberá ajustarse a ellas.

4. La autoridad coordinadora de la Parte Requerida informará a la de la Parte Requirente, a la brevedad posible, sobre los motivos que tenga para no ejecutar una solicitud.

ARTICULO IV EJECUCION DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA

1. El cumplimiento de una solicitud de asistencia se llevará a cabo de conformidad con la legislación nacional de la Parte Requerida, atendiendo a las diligencias solicitadas expresamente conforme al Artículo XI y las conexas y necesarias que se deriven de la naturaleza de la petición para su cabal cumplimiento.

2. Si la Parte Requirente tuviere interés en una condición especial o forma de tramitación de la solicitud de asistencia, lo deberá hacer del conocimiento de la Parte Requerida, de manera expresa y en forma oportuna, la cual accederá si lo permite su legislación nacional.

3. La Parte Requerida ejecutará la solicitud de asistencia relativa a un procedimiento penal que le sea dirigida por las autoridades judiciales o por el Ministerio Público de la Parte Requirente, a través de las respectivas autoridades coordinadoras, y que tenga por objeto actos de instrucción o averiguación.

4. Si la solicitud de asistencia tiene por objeto la transmisión de autos, elementos de prueba y en general cualquier clase de documentos, la Parte Requerida podrá entregar solamente copias debidamente certificadas.

5. La Parte Requerida podrá enviar objetos, autos o documentos originales que le hayan sido solicitados, cuando su legislación nacional se lo permita y no sean necesarios en un procedimiento penal en curso.

6. Los objetos o documentos que hayan sido enviados en cumplimiento de una solicitud de asistencia serán devueltos lo antes posible, a menos que la Parte Requerida renuncie expresamente a ellos.

7. La Parte Requirente será informada de la fecha y lugar de cumplimiento de la solicitud de asistencia.

8. Las Partes podrán autorizar, en condiciones de reciprocidad, la participación de autoridades de la Otra Parte, durante el desahogo de las diligencias que deban realizarse en su territorio. Esta participación será admitida exclusivamente en calidad de observador, de conformidad con la legislación nacional de la Otra Parte.

**ARTICULO V
NOTIFICACION DE ACTOS PROCESALES**

1. La Parte Requerida procederá a la notificación de las resoluciones judiciales o documentos relativos a actos procesales que le haya sido solicitada por la Parte Requirente.

2. La notificación podrá ser realizada mediante la simple remisión del documento al destinatario o, a solicitud de la Parte Requirente, en alguna de las formas previstas por la legislación nacional de la Parte Requerida o en cualquier otra forma compatible con su legislación.

3. La información de la notificación a que hace referencia el párrafo precedente, se hará del conocimiento de las respectivas Cancillerías.

4. La notificación se acreditará mediante recibo fechado y firmado por el destinatario, o por certificación de la autoridad competente que acredite el hecho, la forma y la fecha de notificación. Uno u otro de estos documentos, serán enviados a la Parte Requirente, y si la notificación no ha podido realizarse se harán constar las causas.

**ARTICULO VI
TRASLADO DE PERSONAS BAJO CUSTODIA**

1. La solicitud de asistencia que tenga por objeto la citación de un indiciado, testigo o perito ante las autoridades de la Parte Requirente, sólo se realizará si no existen objeciones de la Parte Requerida y la persona que deba comparecer otorga expresamente su consentimiento para el traslado. La Autoridad Coordinadora de la Parte Requerida expedirá una certificación por escrito del consentimiento de la persona requerida en el territorio de la Parte Requirente. La Autoridad Coordinadora de la Parte Requerida deberá informar de manera expedita tal respuesta a la Autoridad Coordinadora Requirente.

2. La solicitud de asistencia formulada conforme al numeral anterior podrá ser diligenciada si es recibida con un mínimo de cuarenta y cinco (45) días de antelación a la fecha señalada para la comparecencia.

3. Si la Parte Requirente estima que la comparecencia personal de un testigo o perito ante sus autoridades judiciales resulta especialmente necesaria, lo hará constar en la solicitud de citación.

4. La solicitud a que se refiere el apartado anterior deberá mencionar el importe de los viáticos y honorarios que percibirá el testigo o perito.

**ARTICULO VII
DECLARACION DE TESTIGOS Y PERITOS EN EL TERRITORIO DE LA PARTE
REQUERIDA**

1. El testigo o perito cualquiera que sea su nacionalidad que, como consecuencia de una citación comparezca ante las autoridades judiciales de la Parte Requirente, no podrá ser perseguido o detenido por esa Parte por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte Requerida.

2. La inmunidad prevista en el apartado precedente cesará cuando el testigo o perito permaneciere más de treinta (30) días en el territorio de la Parte Requirente, a menos que exista causa, considerada como grave por ambas Partes, por la que el testigo o perito esté imposibilitado para abandonar el territorio de la Parte Requirente.

3. El plazo establecido en el párrafo anterior se contará a partir del momento en que su presencia ya no fuere requerida expresamente por las autoridades judiciales o administrativas de la Parte Requirente.

**ARTICULO VIII
DISPONIBILIDAD DE PERSONAS PARA PRESENTAR PRUEBAS O AUXILIAR EN
UNA INVESTIGACION**

1. La persona que se encuentre en el territorio de la Parte Requerida cuyo testimonio sea solicitado por la Parte Requirente será citada por la autoridad competente de la Parte Requerida, para comparecer y testificar o presentar documentos, registros u objetos en la Parte Requerida, en la misma medida en que se haría en averiguaciones previas o diligencias penales en dicha Parte.

2. Cualquier reclamación de inmunidad, incapacidad o privilegio establecidos conforme a la legislación nacional de la Parte Requirente, serán resueltas exclusivamente por las autoridades competentes de dicha Parte. Consecuentemente se tomará el testimonio en la Parte Requerida y este será enviado a la Parte Requirente, en donde dicha reclamación será resuelta por sus autoridades competentes.

3. La autoridad coordinadora de la Parte Requerida informará a la de la Parte Requirente sobre la fecha y lugar que se hayan fijado para la recepción de la declaración del testigo. Cuando resulte posible, las autoridades coordinadoras se consultarán con el fin de asegurar una fecha conveniente para ambas Partes.

**ARTICULO IX
DISPONIBILIDAD DE PERSONAS BAJO CUSTODIA PARA PRESENTARSE COMO
TESTIGOS O PARA CAREOS**

1. Si en una causa penal se considerase necesaria la comparecencia personal ante autoridades de la Parte Requirente, de una persona bajo custodia en la Parte Requerida, en calidad de testigo o para un careo, se formulará la solicitud correspondiente. Se accederá a ella si la persona bajo custodia presta su consentimiento, por escrito, y si la Parte Requerida estima que no existen consideraciones importantes que se opongan al traslado.

2. La Parte Requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona trasladada y a devolverla tan pronto como se haya realizado la diligencia especificada en la solicitud que dio lugar al traslado, o en cualquier momento previo que haya establecido la Parte Requerida.

3. La Parte Requirente no exigirá a la Parte Requerida que inicie un procedimiento de extradición para asegurar el regreso de la persona trasladada.

4. El tiempo cumplido bajo la custodia de la Parte Requirente se acreditará a la sentencia que haya sido impuesta, en la Parte Requerida, a la persona trasladada.

5. Los gastos ocasionados por la aplicación de este Artículo serán sufragados por la Parte Requirente.

ARTICULO X INTERCAMBIO DE INFORMACION

1. Las Partes se informarán acerca de las sentencias condenatorias que las autoridades judiciales de una de ellas hayan dictado contra nacionales de la Otra.

2. Cuando una de las Partes solicite de la Otra antecedentes penales de una persona, haciendo constar el motivo de la petición, dichos antecedentes le serán comunicados si no lo prohíbe la legislación nacional de la Parte Requerida.

ARTICULO XI CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA

1. Las solicitudes de asistencia se presentarán por escrito. En casos urgentes la solicitud podrá formularse por cualquier medio y la Parte Requerida tomará las medidas necesarias para cumplimentarla, en la inteligencia de que tan pronto como sea posible la solicitud deberá ser formalizada por escrito.

2. Las solicitudes de asistencia deberán incluir:

- a) el nombre de la autoridad competente que lleva a cabo la investigación o diligencia referida en la solicitud y la autoridad que la solicita;
- b) el propósito por el que se formula la solicitud y la naturaleza de la asistencia solicitada;
- c) cuando sea posible, la identidad, nacionalidad y localización de la persona o personas que estén sujetas a la investigación o procedimiento;
- d) descripción de las pruebas, información o cualquier otra asistencia solicitada;
- e) explicación concisa de los hechos u omisiones que constituyen el delito, así como el texto de las disposiciones legales aplicables; y
- f) descripción de cualquier procedimiento específico a seguir en la ejecución de la solicitud de asistencia y, en su caso, detalles del término en el que se debe satisfacer la solicitud.

3. Las solicitudes de asistencia deberán incluir, adicionalmente:

- a) en el caso de solicitudes para la entrega de notificaciones, el nombre y dirección de la persona a quien se le notificará, y la relación de esa persona con las diligencias;
- b) en el caso de que deban tomarse medidas de seguridad o preventivas, una declaración indicando las razones por las que las pruebas pueden ser encontradas en el territorio de la Parte Requerida;
- c) en el caso de cateos, la descripción exacta del lugar a ser cateado o de los recursos, productos o instrumentos del en el caso de solicitudes para tomar la declaración de una persona o para que presente pruebas, el motivo de su testimonio, incluyendo, cuando sea posible, una lista de las preguntas a formular y los detalles sobre cualquier derecho que tenga esa persona para rehusarse a rendir la declaración;

- d) en el caso de solicitudes para trasladar a una persona bajo custodia, la persona o autoridad que estará a cargo de su custodia durante el traslado, el lugar al cual la persona va a ser trasladada y la fecha de regreso de esa persona;
- e) en el caso de préstamo de pruebas, nombre de la persona o autoridad que tendrá la custodia de las pruebas, el sitio al que deberán ser trasladadas y la fecha en la que la prueba debe ser devuelta;
- f) en el caso de cuentas bancarias, nombre del titular, nombre del banco, dirección y el (los) número(s) de cuenta(s); y
- g) cualquier requerimiento confidencial.

4. La Parte Requerida deberá proporcionar información adicional a la Parte Requerida, si esta lo juzga necesario para la ejecución de la solicitud.

5. Cuando una solicitud de asistencia no sea cumplimentada por la Parte Requerida, ésta la devolverá con expresión de la causa.

ARTICULO XII PRODUCTOS DEL DELITO

1. La Parte Requerida, a petición de la Parte Requirente, deberá esforzarse por verificar si cualquier producto de un delito está localizado dentro de su jurisdicción y deberá notificar a la Parte Requirente de los resultados de sus indagaciones o averiguaciones. Al formular la solicitud, la Parte Requirente expondrá los motivos por los que considera que dichos productos están localizados en el territorio de la Parte Requerida.

2. Cuando de conformidad con el numeral 1 de este Artículo, sean ubicados dichos productos del delito, la Parte Requirente podrá solicitar a la Parte Requerida que tome las medidas que sean permitidas por su legislación nacional para

su aseguramiento y decomiso, a fin de evitar que la transferencia, comercio o disposición de los recursos que se sospecha tengan una procedencia ilícita, hasta que la autoridad competente de la Parte Requerente emita una determinación final con respecto a esos recursos.

3. Los recursos asegurados o decomisados conforme al presente Tratado deben ser retenidos por la Parte Requerida, salvo que se acuerde lo contrario entre las Partes.

4. Conforme a este Artículo, deberán respetarse los derechos de terceras personas de buena fe.

ARTICULO XIII LIMITACIONES SOBRE EL USO DE LA INFORMACION Y DE LAS PRUEBAS

Toda información o pruebas suministradas con base en el presente Tratado, se mantendrán en estricta confidencialidad, salvo que estas sean requeridas en investigaciones que formen parte de un proceso penal descrito en la solicitud de asistencia, o que la Parte Requerente y la Parte Requerida acuerden lo contrario.

ARTICULO XIV GASTOS

1. La Parte Requerida cubrirá los gastos de la ejecución de la solicitud de asistencia y la Parte Requironto deberá cubrir:

- a) los gastos relativos al traslado de cualquier persona, desde o hacia la Parte Requerida, y cualquier costo o gasto pagadero a esa persona, mientras se encuentre en su territorio; y
- b) los gastos y honorarios de peritos, en los casos en que estos hubieren sido trasladados a su territorio.

2. Si resulta evidente que la ejecución de la solicitud requiere de gastos de naturaleza extraordinaria, las Partes se consultarán previamente para resolver los términos y condiciones bajo los cuales la asistencia solicitada puede ser proporcionada.

**ARTICULO XV
AUTORIDADES COORDINADORAS**

1. Para asegurar la debida cooperación entre las Partes en la prestación de la asistencia jurídica objeto del presente Tratado, los Estados Unidos Mexicanos designan como Autoridad Coordinadora a la Procuraduría General de la República y la República de Bolivia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La Autoridad Coordinadora de la Parte Requerida deberá cumplir en forma expedita con las solicitudes de asistencia formuladas de conformidad con el presente Tratado o, cuando sea apropiado, las transmitirá a otras autoridades competentes para ejecutarlas, pero conservará la coordinación de la ejecución de dichas solicitudes.

2. Las Partes también podrán utilizar en todo caso la vía diplomática o encomendar a sus cónsules la práctica de diligencias permitidas por la legislación de la Parte Requerida conforme al Derecho Internacional aplicable.

La práctica de las diligencias a que se refiere el párrafo precedente se deberá realizar en coordinación y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

**ARTICULO XVI
LEGALIZACION DE DOCUMENTOS**

Las pruebas y documentos transmitidos en aplicación del presente Tratado se deberán certificar y apostillar por las autoridades competentes de las Partes.

**ARTICULO XVII
CONSULTAS**

1. Las Partes celebrarán consultas, a petición de cualquiera de ellas, en relación con la interpretación, aplicación o cumplimiento del presente Tratado.

**ARTICULO XVIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las Partes con motivo de la interpretación o aplicación del presente Tratado serán resueltas entre las Autoridades

Coordinadoras, si no fuera posible, dichas controversias se resolverán mediante consultas realizadas a través de la vía diplomática.

**ARTICULO XIX
DISPOSICIONES FINALES**

1. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de que las Partes hayan intercambiado notificaciones, por la vía diplomática, indicando que sus respectivos requisitos legales para la entrada en vigor han sido cumplidos.

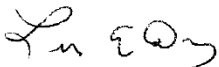
2. El presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud presentada después de su entrada en vigor, incluso si los actos u omisiones relevantes ocurrieron antes de esa fecha.

3. El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes y las modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 1 de este Artículo.

4. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Tratado en cualquier momento, mediante notificación escrita, por la vía diplomática y dejará de estar en vigor ciento ochenta (180) días después de recibida tal notificación; en ese caso, las solicitudes en trámite se llevarán a cabo de manera normal, hasta su conclusión.

Firmado en la ciudad de La Paz, Bolivia el tres de mayo de dos mil cinco, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

**POR EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**



Luis Ernesto Derbez Bautista
Secretario de Relaciones Exteriores

**POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE BOLIVIA**



Pedro Gareca Perales
Fiscal General de la República

[TRANSLATION – TRADUCTION]

TREATY ON COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BOLIVIA ON LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

The Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Bolivia, hereinafter referred to as “the Parties”,

Desiring to cooperate within the framework of their relations of friendship and to provide each other legal assistance with a view to ensuring the application of justice in criminal matters,

Have agreed as follows:

Article I. Scope of the Treaty

1. The Parties undertake to provide each other legal assistance, in accordance with the provisions of the present Treaty and within the limits of their respective national legislation, in carrying out investigations and procedures related to criminal proceedings in respect of acts which fell within the jurisdiction of the Requesting Party at the time they were committed.

2. The present Treaty shall not empower the authorities of either Party to undertake, in the territory of the other Party, the exercise and discharge of the functions for which the authorities of that other Party have exclusive competence under its national legislation.

3. In the case of execution of such measures as seizure of objects, confiscation, raids or house searches, assistance shall be provided if the act that gave rise to them is punishable under the legislation of the two Parties. If the act that gave rise to them is not punishable under the legislation of the Requested Party, that Party may authorize the provision of assistance within the limits set forth by its national legislation.

4. For the purposes of this article, “criminal matters” shall mean, for the United Mexican States, investigations and criminal proceedings in respect of any offence, whether federal or local; and for the Republic of Bolivia, investigations and criminal proceedings in respect of any offence characterized as such by Bolivian criminal law.

5. Assistance in line with the objectives of this Treaty may be provided on the condition that it is compatible with the legislation of the Requested Party.

Article II. Object of assistance

Legal assistance shall include:

- (a) The execution of proceedings, the taking and transfer of evidence requested;
- (b) The transfer of information and documents;

- (c) The service of court orders, writs, sentences and other proceedings;
- (d) The tracing and voluntary transfer of persons as witnesses or experts;
- (e) expert appraisals, confiscation, seizure, freezing of assets, or impoundment, as well as the identification or detection of the proceeds of the property and instruments used in the commission of the offence, on-site inspections, house searches or raids;
- (f) Wiretapping, provided that that is compatible with the national legislation of the Requested Party;
- (g) Facilitating the entry of officials of the Requesting Party into the territory of the Requested Party and granting them freedom of movement in their capacity as observers, subject to authorization by the competent authorities of the Requested Party, in order to assist in carrying out the procedures described in the present Treaty, if permitted by the national legislation of the Requested Party;
- (h) The taking of statements; and
- (i) Any other form of assistance agreed upon by the Parties that is compatible with the object of the present Treaty and is not contrary to the national legislation of the Requested Party.

Article III. Refusal or postponement of assistance

Legal assistance shall be refused if:

- (a) There are substantial grounds for believing that the request for assistance has been made for the purpose of prosecuting a person on account of his or her race, sex, religion, nationality, ethnic origin or political opinions, or that the situation of that person would be prejudiced for any one of those reasons;
- (b) Execution of the request implies that the Requested Party is exceeding its legal competence, or is in some other way prohibited by existing legal provisions of that Party, in which case the coordinating authorities shall consult each other to determine alternative legal means for providing assistance;
- (c) In the opinion of the Requested Party, the request concerns an act characterized as an offence under military law only, a political offence, or any other offence related thereto;
- (d) The Requested Party believes that execution of the request would affect its public order, sovereignty or national security;
- (e) The request refers to an offence for which the person has been permanently absolved of criminal liability, or having been convicted, has served the sentence and discharged the obligations arising from the punishable act; and
- (f) The request does not satisfy the requirements of the present Treaty.

2. Implementation of assistance may be postponed if there is a possibility that it will prejudice an investigation or judicial proceeding in the territory of the Requested Party or the safety of an individual associated with them. In such case, implementation may be postponed or made subject to appropriate conditions, of which the Requesting Party shall be informed.

3. Before refusing the execution of any request under the provisions of the present Treaty, the coordinating authority of the Requested Party shall determine whether there are any conditions under which it would be possible to provide assistance. If the Requesting Party accepts assistance subject to those conditions, it must abide by them.

4. The coordinating authority of the Requested Party shall inform the coordinating authority of the Requesting Party as soon as possible of any reasons it might have for not executing a request.

Article IV. Execution of requests for assistance

1. Requests for assistance shall be executed in accordance with the national legislation of the Requested Party, taking into account the procedures expressly set out in article XI and any related and necessary procedures deriving from the nature of the request in order to ensure its full implementation.

2. If the Requesting Party wishes the request for assistance to be processed in a special way or subject to a special condition, it shall specify that to the Requested Party in a timely manner. The Requested Party shall comply if its national legislation permits.

3. The Requested Party shall execute requests for assistance concerning criminal proceedings that may be addressed to it by the judicial authorities or the Office of the Public Prosecutor of the Requesting Party, through the respective coordinating authorities, for the purpose of pretrial investigations.

4. If the purpose of the request for assistance is the transmission of indictments, evidential matter and in general, any type of document, the Requested Party may deliver duly certified copies.

5. The Requested Party may send objects, indictments or original documents that have been requested if its legislation permits and they are not necessary in a criminal proceeding already under way.

6. Objects or documents sent in execution of a request for assistance shall be returned as soon as possible unless the Requested Party expressly waives the right to have them returned.

7. The Requesting Party shall be informed of the date and place of execution of the request for assistance.

8. A Party may authorize, under conditions of reciprocity, the participation of authorities of the other Party while proceedings are taking place in its territory. Those authorities may participate solely as observers, in accordance with the national legislation of the other Party.

Article V. Service of process

1. The Requested Party shall deliver any court decisions or documents related to proceedings that have been requested by the Requesting Party.

2. Documents may be delivered by simple transmittal to the addressee, or, at the request of the Requesting Party, in a manner provided for by the national legislation of the Requested Party or in any other manner compatible with its legislation.

3. The respective ministries of foreign affairs shall be informed of the delivery referred to in the preceding paragraph.

4. Proof of delivery shall be constituted by a receipt signed and dated by the addressee, or by certification of the competent authority confirming the delivery, and the form and date thereof. Either of those documents may be sent to the Requesting Party, and if the delivery could not be made, the reasons shall be given.

Article VI. Transfer of persons in custody

1. A request for assistance involving the subpoena of a defendant, witness or expert before the authorities of the Requesting Party shall be executed only if the Requested Party does not object and the individual who is to appear expressly consents to the transfer. The coordinating authority of the Requested Party shall send written certification of the consent of the individual requested to appear in the territory of the Requesting Party. The coordinating authority of the Requested Party shall promptly inform the coordinating authority of the Requesting Party of the response.

2. A request for assistance made in accordance with the preceding paragraph can be executed if it is received at least 45 days in advance of the scheduled date of appearance. 3. If the Requesting Party believes that the personal appearance of a witness or expert before the judicial authorities is of particular importance, it shall indicate that in its subpoena request.

4. The request referred to in the preceding paragraph should mention the amount of the allowances and fees to be received by the witness or expert.

Article VII. Statement of witnesses and experts in the territory of the Requested Party

1. Subpoenaed witnesses or experts who appear before the judicial authorities of the Requesting Party may not be prosecuted or detained by that Party for acts or convictions that occurred prior to leaving the territory of the Requested Party, regardless of their nationality.

2. The immunity provided for in the preceding paragraph shall cease if witnesses or experts remain more than 30 days in the territory of the Requesting Party unless there is cause to prevent the departure of the witness or expert from the territory of the Requesting Party and both Parties consider such cause to be serious.

3. The time frame established in the preceding paragraph shall be counted from the date on which the presence of that individual is no longer expressly required by the judicial or administrative authorities of the Requesting Party.

Article VIII. Availability of persons for the presentation of evidence or assistance in an investigation

1. A person who is in the territory of the Requested Party, and whose testimony may be requested by the Requesting Party, shall be subpoenaed by the competent authority of the Requested Party to appear and testify or present documents,

records or objects in the Requested Party to the same extent that that would be done in pretrial or criminal proceedings in that Party.

2. Any claim of immunity, incapacity or privilege, made in accordance with the national legislation of the Requesting Party, shall be settled solely by the competent authorities of that Party. Accordingly, testimony shall be taken in the Requested Party and sent to the Requesting Party, where such claim shall be settled by the competent authorities.

3. The coordinating authority of the Requested Party shall inform the coordinating authority of the Requesting Party of the date and place established for the taking of a witness statement. Where possible, the coordinating authorities shall consult each other in order to ensure that the date is convenient for both Parties.

*Article IX. Availability of persons in custody to appear
as witnesses or to provide counter-testimony*

1. If an individual being held in custody in the Requested Party is required to personally appear before the authorities of the Requested Party in a criminal case, as a witness or to provide counter-testimony, the corresponding request shall be formulated. It shall be granted if the person in custody consents, in writing, and if the Requested Party believes that there are no major considerations that would make the transfer inadvisable.

2. The Requesting Party shall be obligated to hold the person transferred in custody and return that person immediately upon the completion of the specific proceeding in the request which gave rise to the transfer, or at any time prior thereto which the Requested Party may have established.

3. The Requesting Party shall not require the Requested Party to initiate extradition proceedings in order to ensure the return of the transferred person.

4. Time served in the custody of the Requesting Party shall be credited against the sentence imposed on the transferred person in the Requested Party.

5. Expenses incurred for the application of this article shall be borne by the Requesting Party.

Article X. Exchange of information

1. The Parties shall inform each other of convictions handed down by their respective judicial authorities against nationals of the other Party.

2. When one of the Parties requests the other to provide criminal records of an individual and states the reason for the request, those records shall be made available unless that is prohibited by the national legislation of the Requested Party.

Article XI. Content of requests for assistance

1. Requests for assistance shall be made in writing. In urgent cases, the request may be made through any means and the Requested Party shall take the necessary

measures to execute it, on the understanding that as soon as possible, the request shall be formalized in writing.

2. Requests for assistance shall include:

(a) The name of the competent authority carrying out the investigation or proceedings referred to in the request and the authority that is requesting it;

(b) The purpose for which the request is being made and the nature of assistance requested;

(c) Where possible, the identity, nationality and whereabouts of the person or persons under investigation or subject to proceedings;

(d) Description of the evidence, information or any other assistance requested;

(e) A brief explanation of the acts or omissions constituting the offence, as well as the text of the applicable legal provisions; and

(f) A description of any specific procedure to be followed in executing the request for assistance, and, where appropriate, details of the time frame in which the request must be satisfied.

3. Requests for assistance shall further include:

(a) In the case of requests for service of process, the name and address of the person to be served, and the relationship of that person to the proceedings;

(b) Where security or preventive measures must be taken, a statement of the reasons for which the evidence is believed to be in the territory of the Requested Party;

(c) In the case of raids, a precise description of the site to be searched or of the resources, proceeds or instruments of the offence; in the case of requests to take a statement from a person or for the presentation of evidence, the reason for the testimony, including, where possible, a list of questions to be posed and details on any rights the person may have to refuse to give a statement;

(d) In the case of a request to transfer a person being held in custody, the person or authority responsible for the custody of that person during the transfer, the place to which the person will be transferred and the date that person will return;

(e) In the case of lending of evidence, the name of the person or authority assigned custody of the evidence, the place to which the evidence is to be transferred, and the date by which the evidence must be returned;

(f) In the case of bank accounts, the name of the account holder, the name and address of the bank and the account number(s); and

(g) Any confidential requirement.

4. The Requesting Party shall provide additional information to the Requested Party if the latter deems it necessary for the execution of the request.

5. When a request for assistance is not executed by the Requested Party, that Party shall return it and give the reasons for the return.

Article XII. Proceeds of the crime

1. The Requested Party, at the request of the Requesting Party, shall make every effort to ascertain whether any proceeds of a crime are located within its jurisdiction and

shall notify the Requesting Party of the results of its inquiries or investigations. In making the request, the Requesting Party shall indicate the reasons it believes that such proceeds are located in the territory of the Requested Party.

2. If, in accordance with paragraph 1 of this article, the proceeds of the crime are located in the territory of the Requested Party, the Requesting Party may request the Requested Party to take such measures as may be permitted by its national legislation for their seizure and confiscation in order to prevent the transfer, sale or disposal of the resources suspected to be of illicit origin, until such time as the competent authority of the Requesting Party issues a final determination concerning those resources.

3. Resources that are seized or confiscated under the present Treaty shall be retained by the Requested Party, unless the Parties agree otherwise.

4. In accordance with this article, the rights of bona fide third persons must be respected.

Article XIII. Limitations on the use of information and evidence

Any information or evidence provided on the basis of the present Treaty shall remain strictly confidential unless it is required in investigations associated with a criminal proceeding described in the request for assistance, or the Requesting Party and the Requested Party agree otherwise.

Article XIV. Expenses

1. The Requested Party shall bear the expenses of executing the request for assistance and the Requesting Party shall cover:

(a) Expenses related to the transfer of any person to or from the Requested Party, and any costs or expenses payable to that person while in its territory; and

(b) The expenses and fees of experts in cases in which they may have been transferred to its territory.

2. Should it become clear that execution of the request will require expenses of an extraordinary nature, the Parties shall first consult to determine the terms and conditions under which the requested assistance can be provided.

Article XV. Coordinating authorities

1. To ensure the proper cooperation between the Parties in the provision of legal assistance under the present Treaty, the United Mexican States shall designate the Office of the Attorney-General of the Republic as the coordinating authority and the Republic of Bolivia shall designate the Ministry of Foreign Affairs and Worship. The coordinating authority of the Requested Party shall promptly execute the requests for assistance made under the present Treaty, or, where appropriate, transmit them to other competent authorities for execution while continuing to coordinate the execution of such requests.

2. In addition, the Parties may at any time utilize the diplomatic channel or request their consuls to carry out the procedures permitted by the legislation of the Requested

Party in accordance with applicable international law. Execution of the procedures referred to in the preceding paragraph shall be carried out in coordination with, and through, the Office of the Secretary for Foreign Affairs.

Article XVI. Authentication of documents

Evidence and documents transmitted pursuant to the present Treaty must be certified by the competent authorities of the Parties and include an apostille.

Article XVII. Consultations

The Parties shall hold consultations, at the request of either Party, in connection with the interpretation, application or implementation of the present Treaty.

Article XVIII. Settlement of disputes

Any disputes that may arise between the Parties over the interpretation or application of the present Treaty shall be settled between the coordinating authorities; if that is not possible, such disputes shall be settled by means of consultation through the diplomatic channel.

Article XIX. Final provisions

1. The present Treaty shall enter into force 30 days after the Parties have exchanged notifications, through the diplomatic channel, indicating that their respective legal requirements for entry into force have been fulfilled.

2. The present Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, including where acts or omissions occurred prior to that date.

3. The present Treaty may be amended by mutual consent of the Parties and the amendments agreed upon shall enter into force in accordance with the procedure set out in paragraph 1 of this article.

4. Either Party may terminate the present Treaty at any time by giving written notice through the diplomatic channel and it shall cease to be in force 180 days after such notification has been received; in such case, requests already in the process of being executed shall continue to be executed normally until such time as they are fulfilled.

SIGNED in the city of La Paz, Bolivia, on 3 May 2005, in two original copies in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Government of the United Mexican States:

LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA
Secretary for Foreign Affairs

For the Government of the Republic of Bolivia:

PEDRO GARECA PERALES

Attorney-General of the Republic

[TRANSLATION – TRADUCTION]

TRAITÉ DE COOPÉRATION POUR L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN
MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
DU MEXIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
BOLIVIE

Le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République de Bolivie, ci-après dénommés les « Parties »,

Animés du désir de coopérer dans le cadre de leurs relations d'amitié et de se prêter une entraide judiciaire afin d'assurer l'application de la justice en matière pénale,

Sont convenus de ce qui suit :

Article I. Champ d'application du Traité

1. Conformément aux dispositions du présent Traité et dans les limites prévues par leur législation nationale respective, les Parties s'engagent à se prêter une entraide judiciaire pour la réalisation d'enquêtes et d'autres formalités liées à toute procédure judiciaire pénale relative à des faits relevant de la juridiction de la Partie requérante au moment où ils ont été commis.

2. Le présent Traité n'autorise pas les autorités d'une des Parties à exercer ou à déployer, sur le territoire de l'autre Partie, des fonctions dont la compétence est exclusivement réservée aux autorités de cette autre Partie en vertu de sa législation nationale.

3. En ce qui concerne la mise en application de mesures comme la saisie d'objets, la confiscation, les perquisitions et saisies au domicile, l'entraide est fournie lorsque le fait qui est à son origine est punissable selon la législation des deux Parties. Lorsque le fait qui est à son origine n'est pas punissable selon la législation de la Partie requise, cette dernière peut autoriser la fourniture de l'entraide dans les limites prévues par sa législation nationale.

4. Aux fins du présent article, l'expression « matière pénale » s'entend, pour les États-Unis du Mexique, de toute enquête ou procédure pénale relative à toute infraction d'ordre fédéral ou local; et, pour la République de Bolivie, de toute enquête ou procédure pénale relative à toute infraction visée par la législation pénale bolivienne.

5. Toute entraide qui est conforme aux objectifs du présent Traité peut être attribuée, à condition qu'elle soit compatible avec la législation de la Partie requise.

Article II. Objet de l'entraide

L'entraide judiciaire comprend :

a) L'organisation de mesures d'enquête ainsi que l'obtention et la transmission des éléments de preuve demandés;

- b) La transmission de renseignements et de documents;
- c) La notification d'arrêts, de pièces de la procédure écrite, de jugements et de tous actes de procédure;
- d) La localisation et le transfert volontaire de personnes en tant que témoins ou experts;
- e) L'exécution de mesures d'expertise, de confiscation, de saisie, de gel des avoirs, ainsi que l'identification ou la détection du produits des biens et instruments ayant servi à commettre l'infraction, des descentes sur les lieux, des saisies au domicile ou des perquisitions;
- f) L'interception de communications privées, à condition qu'elle soit compatible avec la législation nationale de la Partie requise;
- g) Sous réserve de l'autorisation des autorités de la Partie requise, la facilitation de l'entrée, en qualité d'observateurs, des fonctionnaires de la Partie requérante sur le territoire de ladite Partie et la liberté d'y circuler librement, en vue d'assister à la mise en œuvre des mesures décrites dans le présent Traité et ce, à condition que la législation nationale de la Partie requise le permette;
- h) L'obtention de déclarations, et
- i) Toute autre forme d'entraide convenue entre les Parties et conforme aux objectifs du présent Traité, pour autant qu'elle ne soit pas contraire à la législation nationale de la Partie requise.

Article III. Refus ou report de l'entraide

1. L'entraide judiciaire est refusée si :
 - a) Il existe des motifs sérieux de penser que la demande d'entraide a été formulée dans le but de juger une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons;
 - b) L'exécution de la demande implique que la Partie requise n'outrepasse sa compétence juridique ou qu'elle ne soit interdite par ses dispositions légales en vigueur, auquel cas les autorités coordinatrices se consulteront afin de chercher d'autres moyens légaux pour assurer l'entraide;
 - c) La Partie requise considère que la demande concerne un fait qualifié d'infraction uniquement selon la législation militaire, une infraction politique ou toute autre infraction connexe;
 - d) La Partie requise estime que la demande porte atteinte à son ordre public, à sa souveraineté ou à sa sécurité nationale;
 - e) La demande concerne une infraction pour laquelle la personne a été définitivement exonérée de responsabilité pénale ou, en cas de condamnation, la sanction et les obligations découlant du fait punissable sont éteintes; et
 - f) La demande ne satisfait pas aux exigences prévues par le présent Traité.
2. La mise en œuvre de l'entraide peut être différée si cette dernière nuit à une enquête ou à une procédure judiciaire menée sur le territoire de la Partie requise, ou si

elle compromet la sécurité de toute personne concernée. Dans ce cas-là, ladite mise en œuvre peut être différée ou soumise à des conditions, ce dont la Partie requérante doit être informée.

3. Avant de refuser toute demande, conformément aux dispositions du présent Traité, l'autorité coordinatrice de la Partie requise doit déterminer si l'entraide peut être accordée aux conditions qu'elle estime nécessaires. La Partie requérante qui accepte cette entraide conditionnelle doit en respecter les clauses.

4. L'autorité coordinatrice de la Partie requise informe sans délai son homologue de la Partie requérante des raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas donner suite à une demande d'entraide.

Article IV. Exécution des demandes d'entraide judiciaire

1. L'exécution d'une demande d'entraide est menée à bien conformément aux dispositions de la législation nationale de la Partie requise, en respectant les formalités demandées expressément, conformément aux dispositions de l'article XI, ainsi que celles connexes et nécessaires découlant de la nature de la demande, en vue de sa correcte réalisation.

2. Si la Partie requérante a un intérêt à poser une condition ou une formalité particulière concernant la demande d'entraide, elle en informe expressément et en temps et en heure la Partie requise, laquelle fera droit à une telle demande dans le respect de sa législation nationale.

3. La Partie requise exécute les demandes d'entraide judiciaire relatives à une procédure pénale ayant pour objet des actes d'instruction ou des mesures d'enquête et qui lui sont adressées par les autorités judiciaires ou par le Ministère public de la Partie requérante par l'intermédiaire des autorités coordinatrices respectives.

4. Si la demande d'entraide a pour objet la transmission d'actes, d'éléments de preuve et en général de tout type de documents, la Partie requise peut ne transmettre que de simples copies dûment certifiées conformes.

5. La Partie requise peut envoyer les objets, les actes ou les documents originaux demandés si sa législation nationale le lui permet et sous réserve que lesdits éléments ne soient pas nécessaires dans le cadre d'une procédure pénale en cours.

6. Les objets ou documents originaux envoyés dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide doivent être renvoyés dans les plus brefs délais, à moins que la Partie requise y renonce expressément.

7. La Partie requérante est tenue informée de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide judiciaire.

8. Les Parties peuvent autoriser, sous condition de réciprocité, la participation des autorités de l'autre partie à la réalisation des mesures devant intervenir sur leurs territoires respectifs. Une telle participation est uniquement autorisée en qualité d'observateur, dans le respect de la législation nationale de l'autre partie.

Article V. Transmission des actes procédure

1. La Partie requise transmet les décisions judiciaires ou les documents relatifs à des actes de procédure qui lui ont été demandés par la Partie requérante.

2. La transmission peut se faire par simple remise des documents au destinataire ou, à la demande de la Partie requérante, sous toutes formes prévues par la législation de la Partie requise ou de toute autre manière compatible avec sa législation.

3. Le Ministère des affaires étrangères de chacune des Parties est informé des transmissions susvisées.

4. La transmission est attestée par un reçu daté et signé par le destinataire ou par voie de certification de l'autorité compétente reconnaissant l'intervention, la forme et la date de la transmission. L'un ou l'autre de ces documents est envoyé à la Partie requérante et, si la transmission n'a pas pu avoir lieu, il conviendra d'en indiquer les motifs.

Article VI. Transfert de détenus

1. Les demandes d'entraide judiciaire ayant pour objet la citation à comparaître d'un suspect, d'un témoin ou d'un expert devant les autorités de la Partie requérante ne peuvent être exécutées que si la Partie requise ne s'y oppose pas et que si la personne citée à comparaître consent expressément au transfert. L'autorité coordinatrice de la Partie requise délivre une certification écrite témoignant du consentement de la personne citée à comparaître sur le territoire de la Partie requérante. L'autorité coordinatrice de la Partie requise informe sans délai d'une telle réponse l'autorité coordinatrice de la Partie requérante.

2. La demande d'entraide formulée conformément aux dispositions du paragraphe précédent peut être exécutée si elle est reçue au moins quarante-cinq (45) jours avant la date fixée pour la comparution.

3. Si la Partie requérante estime que la comparution en personne d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires s'avère indispensable, elle doit en faire mention dans la sommation à comparaître.

4. La demande à laquelle se rapporte le paragraphe antérieur doit indiquer le montant des indemnités et des honoraires que percevra le témoin ou l'expert.

Article VII. Témoignages et déclarations de témoins et d'experts sur le territoire de la Partie requise

1. Le témoin ou l'expert, quelle que soit sa nationalité qui, suite à une citation, comparait devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut pas être poursuivi ni détenu dans cet État pour des faits ou des condamnations antérieur(e)s à sa sortie du territoire de la Partie requise.

2. L'immunité prévue au paragraphe précédent cesse si le témoin ou l'expert reste plus de trente (30) jours sur le territoire de la Partie requérante, à moins qu'il n'existe une raison grave de l'avis des deux Parties empêchant le témoin ou l'expert de quitter le territoire de la Partie requérante.

3. Le délai fixé au paragraphe antérieur commence à courir à partir du moment où sa présence n'est plus exigée expressément par les autorités judiciaires ou administratives de la Partie Requérante.

*Article VIII. Disponibilité des personnes pour verser
des éléments de preuve ou aider à une enquête*

1. Les personnes se trouvant sur le territoire de la Partie requise dont le témoignage est sollicité par la Partie requérante sont citées par l'autorité compétente de la Partie requise, pour comparaître, prêter témoignage ou présenter des documents ou des objets sur le territoire de la Partie requise, et cela de la même manière que cela aurait été le cas dans le cadre de la réalisation de mesures d'enquête préliminaires ou de poursuites pénales sur le territoire de ladite Partie.

2. Il appartient exclusivement aux autorités compétentes de la Partie requérante de statuer sur toute question d'immunité, d'incapacité ou de privilège invoquée aux termes de sa propre législation. Aussi, les témoignages sont prêtés auprès de la Partie requise et ils sont envoyés à la Partie requérante, pour que la question susvisée soit tranchée par les autorités compétentes de cette dernière.

3. L'autorité coordinatrice de la Partie requise informe la Partie requérante de la date et du lieu fixés pour la réception de la déclaration d'un témoin. Dans la mesure du possible, les autorités coordinatrices se consultent pour fixer une date convenant aux deux Parties.

*Article IX. Disponibilité des détenus pour témoigner
ou se présenter à des confrontations*

1. Si, dans une affaire pénale, la comparution en personne, en qualité de témoin ou pour une confrontation, devant les autorités de la Partie requérante, d'un individu détenu sur le territoire de la Partie requise, est jugée nécessaire, la demande correspondante doit être formulée. Il doit être fait droit à cette demande si l'individu détenu y consent par écrit, et si la Partie requise estime qu'il n'existe pas de raisons importantes s'opposant au transfert demandé.

2. La Partie requérante a l'obligation de garder en détention la personne ainsi transférée et de la renvoyer dès la fin des formalités précisées dans la demande qui a donné lieu à son transfert, ou à tout moment antérieur fixé par la Partie requise.

3. La Partie requérante ne doit pas exiger de la Partie requise qu'elle entame une procédure d'extradition afin de garantir le retour de la personne ainsi transférée.

4. Le temps de détention passé sur le territoire de la Partie requérante est pris en considération pour le décompte de la condamnation infligée à la personne transférée sur le territoire de la Partie requise.

5. Les frais occasionnés par l'application du présent article sont à charge de la Partie requérante.

Article X. Échange de renseignements

1. Les Parties doivent se tenir mutuellement informées des décisions judiciaires de condamnation que les autorités judiciaires de l'une d'elles auraient prononcées à l'encontre de ressortissants de l'autre Partie.

2. Lorsqu'une des Parties demande à l'autre les antécédents judiciaires d'une personne, en indiquant la raison de cette requête, ces antécédents doivent lui être communiqués pour autant que la législation de la Partie requise ne l'interdise pas.

Article XI. Contenu des demandes d'entraide judiciaire

1. Les demandes d'entraide doivent être formulées par écrit. En cas d'urgence, les demandes peuvent intervenir par tous moyens, et la Partie requise doit prendre les mesures nécessaires pour y faire droit, étant entendu que la demande doit être formulée par écrit dans les meilleurs délais envisageables.

2. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :

a) Le nom de l'autorité compétente chargée de l'enquête ou de la mesure mentionnée dans la demande, ainsi que le nom de l'autorité qui formule la demande;

b) L'objet de la demande et la nature de l'entraide recherchée;

c) Dans la mesure du possible, l'identité, la nationalité de la ou des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure, et le lieu où elles se trouvent;

d) Une description des éléments de preuve, des renseignements ou de toutes autres formes d'entraide sollicités;

e) Une exposition concise des faits ou des omissions constitutifs du délit, ainsi que du texte des dispositions légales applicables; et

f) Une description de toute procédure particulière à suivre pour l'exécution de la demande d'entraide, ainsi que, le cas échéant, des précisions concernant les délais dans lesquels il conviendrait de satisfaire à la demande.

3. En outre, les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :

a) En cas de demandes de notification de documents, le nom et le domicile de la personne à laquelle ils doivent être notifiés, ainsi que le rôle de cette personne dans le cadre de la procédure;

b) En cas de demande de mesures de sûreté ou préventives, une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles on estime qu'il existe des éléments de preuve sur le territoire de la Partie requise;

c) En cas de fouilles, la description exacte du lieu à fouiller ou des ressources, des biens ou des instruments du délit. En cas de demande de prise du témoignage d'une personne ou de présentation de preuves, le sujet sur lequel doit porter l'interrogatoire, y compris dans la mesure du possible, une liste de questions, ainsi que des précisions sur tout droit que pourrait avoir la personne devant être interrogée de refuser de témoigner;

d) S'agissant des demandes de transfert de détenus, la personne ou autorité qui en assurera la garde au cours du transfert, le lieu où le détenu sera transféré et la date de son retour;

e) En cas de prêt de pièces à conviction, la personne ou l'autorité qui en aura la garde, le lieu où les pièces seront acheminées et la date à laquelle elles seront retournées;

f) S'agissant des comptes bancaires, le nom du titulaire, le nom et l'adresse de l'établissement bancaire et le(s) numéro(s) de compte; et

g) Toute exigence de confidentialité.

4. La Partie requérante doit fournir à la Partie requise les renseignements supplémentaires jugés nécessaires par cette dernière pour l'exécution de la demande.

5. Lorsqu'une demande d'entraide n'est pas honorée par la Partie requise, celle-ci doit la renvoyer en indiquant le motif de son inaction.

Article XII. Produits du délit

1. La Partie requise doit, sur demande de la Partie requérante, chercher à établir si le produit d'un délit se trouve sur son territoire, et elle notifie à la Partie requérante le résultat de ses recherches. En faisant cette demande, la Partie requérante indique à la Partie requise les motifs qui lui font croire que lesdits produits du délit se trouvent sur son territoire.

2. Lorsque, conformément au paragraphe 1, les produits d'un délit sont retrouvés, la Partie requérante peut demander à la Partie requise de prendre les mesures qu'autorise son droit national en vue de leur confiscation et de leur saisie, afin d'éviter que le transfert, le commerce ou la disposition suspect(e) des ressources ait une provenance illicite, et cela tant que l'autorité compétente de la Partie requérante ne se sera définitivement prononcée les concernant.

3. Les ressources confisquées ou saisies conformément aux dispositions du présent Traité sont retenues par la Partie requise, sauf si les Parties en décident autrement.

4. Au sens du présent article, les droits des tiers de bonne foi doivent être respectés.

Article XIII. Restrictions applicables à l'utilisation des renseignements et des éléments de preuve

L'ensemble des renseignements ou des éléments de preuve fournis dans le cadre du présent Traité doit être tenu strictement confidentiel, sauf si leur divulgation est exigée pour les besoins d'enquêtes faisant partie intégrante d'une procédure pénale décrite dans la demande d'entraide, ou si la Partie requérante et la Partie requise en conviennent autrement.

Article XIV. Frais liés aux demandes d'entraide judiciaire

1. La Partie requise doit couvrir les frais d'exécution de la demande d'entraide, alors que la Partie requérante prend à sa charge, quant à elle:

a) Les frais relatifs au transfert de toute personne en provenance du ou en partance vers le territoire de la Partie requise, ainsi que de tous les autres frais ou dépenses dus à cette même personne, alors qu'elle se trouve sur le territoire de la Partie requérante; et

b) Les frais et honoraires des experts qui se seraient rendus sur le territoire de la Partie requérante.

2. S'il semble évident que l'exécution de la demande requiert des frais de nature extraordinaire, les Parties doivent se consulter au préalable pour fixer les termes et conditions en vertu desquels l'entraide demandée pourra être fournie.

Article XV. Autorités coordinatrices

1. Afin d'assurer la bonne coopération entre les Parties dans la fourniture de l'entraide judiciaire qui fait l'objet du présent Traité, les États-Unis du Mexique désignent comme autorité coordinatrice le Bureau du Procureur général de la République, et la République de Bolivie désigne, quant à elle, le Ministère des relations extérieures et du culte. L'autorité coordinatrice de la Partie requise doit traiter rapidement les demandes d'entraide formulées dans le cadre du présent Traité ou, le cas échéant, les transmettre à d'autres autorités compétentes, tout en conservant la coordination de leur exécution.

2. Les Parties peuvent en toutes circonstances utiliser la voie diplomatique ou charger leurs consuls d'effectuer les démarches autorisées par la législation de la Partie requise, dans le respect du droit international applicable.

L'accomplissement des démarches mentionnées au paragraphe précédent doit intervenir en coordination avec et par l'intermédiaire du Ministère des relations extérieures.

Article XVI. Légalisation des documents

Les pièces justificatives et les documents transmis en application du présent Traité doivent être certifiés conformes et légalisés par les autorités compétentes.

Article XVII. Consultations

1. Les Parties doivent se consulter, sur demande de l'une ou de l'autre d'entre elles, concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent Traité.

Article XVIII. Résolution des différends

Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent Traité est réglé par les autorités coordinatrices, et en cas d'échec de ces dernières, par le biais de consultations réalisées par la voie diplomatique.

Article XIX. Dispositions finales

1. Le présent Traité entre en vigueur trente (30) jours après la dernière notification adressée par la voie diplomatique par laquelle les Parties indiquent que les conditions légales internes pour son entrée en vigueur sont réunies.

2. Le présent Traité s'applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur, y compris si les actes ou les omissions concernés sont antérieurs à cette date.

3. Le présent Traité peut être modifié par consentement mutuel des Parties et les modifications approuvées prennent effet conformément à la procédure établie à l'alinéa 1 du présent article.

4. L'une quelconque des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment, par une notification écrite adressée par la voie diplomatique. Le Traité prend fin cent quatre-vingts (180) jours après la réception de ladite notification; toutefois, la dénonciation du présent Traité n'affecte en rien les demandes en instance qui doivent être honorées normalement jusqu'à leur conclusion.

FAIT à La Paz (Bolivie), le trois mai deux mil cinq, en deux exemplaires originaux en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique :

LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA
Secrétaire aux affaires étrangères

Pour le Gouvernement de la République de Bolivie :

PEDRO GARECA PERALES
Procureur général de la République